



Título: El Incendio Patagónico

Medio: La Tercera

Sección: Opinión

Circulación: Diario

Página:

<http://papeldigital.info/lt/?2012022501#2>

COLUMNA

El incendio patagónico



Por **Felipe Morandé**

LA PATAGONIA aysenina está en pie de guerra. Unas protestas iniciales de pescadores artesanales que implicaron manifestaciones callejeras, quema de neumáticos y tomas, fueron una chispa que en cuestión de horas se transformó en una movilización de diversas organizaciones sociales que se sumaron con entusiasmo para presionar al Estado. Elaboraron un petitorio amplio, exigieron la presencia de ministros y aplicaron una estrategia de ocupación de lugares estratégicos de abastecimiento de combustible y alimentos a las principales ciudades de la región.

Lo que sucede en Aysén no puede verse como un hecho aislado, sin conexión con la protesta masiva de Magallanes en enero de 2011, la de Calama, de mediados de año, la contraria a la central Barrancones y, en general, con las movilizaciones estudiantiles del invierno pasado. Sin entrar a evaluar la justicia o injusticia de las exigencias en cada caso, hay en todos ellos una demostración de lo que en teoría de juegos se conoce

como el problema de la inconsistencia temporal de una política socialmente óptima. En simple, cuando tenemos al gobierno por un lado y los ciudadanos por otro, una política determinada apreciada como socialmente buena -por ejemplo, el impuesto específico a los combustibles que apunta a desincentivar el uso del automóvil con externalidades positivas sobre la contaminación y la congestión- puede ser inconsistente temporalmente. Ello, en el sentido de que una vez instaurada, el gobierno tendrá los incentivos para cambiarla a fin de ser más popular o para evitar el castigo en las urnas o en las encuestas, aunque se pierda el efecto benéfico de la misma. Para evitar este comportamiento oportunista del gobierno de turno, se crean instituciones o arreglos sociales que atan (parcialmente) de manos a quien ostenta el poder político (en el caso del impuesto a los combustibles, se trata de una ley que debe ser modificada con un apoyo mayoritario del Congreso). Pero a veces esas instituciones no están diseñadas adecuadamente, dejando demasiado poder discrecional en el gobierno o dándole

incentivos equivocados. También puede ser que el mal funcionamiento de algunas instituciones o arreglos sociales afecten el sentimiento de justicia de grupos importantes de la población, elementos que pueden conducir a estos "estallidos" sociales.

La reflexión hoy es qué instituciones no están funcionando. ¿La aparente falta de representatividad de los políticos, derivada del sistema binominal? ¿La falta de poder y recursos en regiones? ¿Un periodo de gobierno de cuatro años que no permite mirar un horizonte de largo plazo? ¿Excesivo presidencialismo? ¿Una alteración del contrato social que balancea deberes y derechos? ¿Falta de poder en la base, sea de consumidores, pobladores o trabajadores?

Pero no se trata sólo de instituciones. Como este es un "juego repetido" -la relación entre gobierno y ciudadanos no se agota en un solo evento-, el gobierno puede abstenerse de un comportamiento oportunista para hacerse una reputación de seriedad y búsqueda del bien común. No obstante, si el gobierno cae una vez en la tentación del oportunismo, valida la inconsistencia

temporal y genera el ambiente para que las movilizaciones, presiones o tomas sean reiteradas. En este sentido se vinculan los múltiples estallidos desde 2010.

La primera oportunidad en que el actual gobierno cedió al oportunismo fue en el caso Barrancones, donde el Presidente revocó una autorización de las autoridades ambientales de la IV Región. Después vinieron la reversión del aumento programado en el precio del gas en Magallanes, ante las masivas manifestaciones en contra en esa región; luego Calama, las demandas estudiantiles y ahora Aysén. El Ejecutivo no se la jugó por buscar una reputación de hacer prevalecer el orden público y sus propias políticas a como de lugar, para cortar la sucesión de estallidos, sino que más bien por la negociación que considera concesiones acotadas a los manifestantes sin renunciar a un hilo conductor que mantenga el trazo grueso de sus políticas. ¿Mal menor? ¿Realismo político de un gobierno sin mayoría en el Congreso?

Economista y ex ministro de Estado